



Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:

Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas



Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

El exceso ritual manifiesto en procesos judiciales desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.¹

Mario Alejandro Acosta Gómez
Universidad Católica de Colombia

Resumen

La administración de justicia en Colombia comprende un derecho fundamental consagrado en el artículo 229 de la Constitución política de 1991, que señala que toda persona tiene la posibilidad de acudir, ante las instancias que ejerzan funciones jurisdiccionales, y dicho acceso debe darse en atendiendo en principio de igualdad en todos los casos. Dicho acceso a la administración de justicia permite al individuo solicitar la determinación de los derechos previamente reconocidos por el ordenamiento jurídico, para lo cual el juez acudirá a los procedimientos que han sido establecidos en la Ley. Sin embargo, en diversas ocasiones se ha manifestado que las normas procesales son una herramienta y no un obstáculo para hacer efectivos derechos de las personas, y en ese orden de ideas no puede prevalecer la justicia formal sobre la material. Este artículo de investigación plantea un análisis sobre el defecto judicial del exceso ritual manifiesto en observancia de lo dispuesto por la Corte Constitucional en su sentencia SU-268 de 2019 y la línea jurisprudencial por esta establecida.

Palabras clave: Colombia, Justicia Formal, Justicia Material, Administración de Justicia, Debido Proceso, Normas Procedimentales.

Abstract

The administration of justice in Colombia includes a fundamental right enshrined in article 229 of the 1991 Political Constitution, which states that every person has the possibility of attending, before the instances that exercise jurisdictional functions, and such access must be given in response to the principle of equality in all cases. Such access to the administration of justice allows the individual to request the determination of the rights previously recognized by the legal system,

¹ Artículo de reflexión elaborado por Mario Alejandro Acosta Gómez, estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, con materias culminadas, correo electrónico: maacosta55@ucatolica.edu.co como Trabajo de Grado para optar al Título de Abogado, bajo la dirección del profesor Jesús Caldera Ynfante, PhD., Docente Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, año 2020.

for which the judge will go to the procedures that have been established in the Law. However, on several occasions it has been stated that procedural norms are a tool and not an obstacle to enforce the rights of people, and in that order of ideas, formal justice over the material cannot prevail. This research article presents an analysis on this subject in compliance with the provisions of the Constitutional Court in its judgment SU-268 of 2019.

Key words: Colombia, Formal Justice, Material Justice, Administration of Justice, Due Process, Procedural Rules.

Sumario

Introducción. 1. Derecho fundamental a la administración de justicia en Colombia. 2. La importancia de la prevalencia de la justicia material. 3. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y la afectación del derecho fundamental al debido proceso. 3.1 El defecto procedimental en el ordenamiento jurídico colombiano. 4.- Análisis de la Sentencia SU-268 de 2019 de la Corte Constitucional colombiana. 4.1 Hechos objeto de la discusión en la Sentencia SU-268 de 2019. 4.2 Las consideraciones de la Corte Constitucional sobre el exceso ritual manifiesto y las reglas para su identificación. Conclusiones. Referencias.

Introducción

Colombia se erige en un Estado social de derecho, cuyas características esenciales son la garantía de los derechos y las libertades de los individuos y encausando los fines del Estado hacia el bienestar social y enfatizando en la necesidad de la separación de poderes para establecer límites entre los mismos, y evitar concentraciones que puedan derivar en la imposición de un régimen totalitario (Caldera Ynfante, J. de los Santos, I, & Ávila Hernández, 2018).

En ese sentido, y siendo un derecho fundamental de los individuos el acceso a la administración de justicia es importante señalar que el mismo debe en todo caso estar orientado a la búsqueda de la justicia material, en la cual debe prevalecer el derecho sustancial como bien se consagra en el artículo 228 de la Constitución Política, que busca que el formalismo no impida al Juez emitir una decisión que corresponda a la realidad -aplicando la justicia material- al asunto sometido a su conocimiento.

Es importante mencionar que la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia, la cual se reseñara más adelante, viene expresado que las normas procedimentales en todo momento deben estar ligadas al debido proceso, y que, en ese sentido es obligación del operador jurídico una vez agotada cada una de las etapas procesales realizar un control sobre el proceso para evitar nulidades, para lo cual deberá sanear las irregularidades que se presenten.

Sin embargo, en ocasiones los jueces pierden de vista la importancia de la garantía de los derechos de las partes en los procesos judiciales e incurren en yerros por privilegiar las normas procedimentales, sacrificando la justicia material en favor de formalismos no esenciales, incurriendo en un exceso ritual manifiesto que se predica en los casos en los que el funcionario judicial, realiza una aplicación mecánica de las formas o normas procedimentales, y en virtud de esto desconoce la verdad jurídica (Caicedo, 2017).

Ahora bien, teniendo en cuenta que la justicia material debe prevalecer sobre la formal, esto quiere decir que la correcta administración de justicia debe privilegiar los derechos sustanciales y la búsqueda de la verdad en el proceso (Botero, 2002). En ese sentido, al momento de valorar las pruebas no les es permitido a los jueces incurrir en exceso ritual manifiesto, o en una falta de valoración de las pruebas de acuerdo a la Sentencia T-428 de 2012, En esa medida y considerando la importancia de la Sentencia en la que se expone una línea jurisprudencial precisa sobre los casos en los cuales el Juez puede caer en un exceso ritual manifiesto dentro de un proceso judicial.

Desde el contexto anterior, se ha planteado como pregunta de investigación la siguiente: ¿En qué casos se configura el exceso ritual manifiesto en las actuaciones judiciales de acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-268 de 2019? Lo anterior persigue el objetivo principal de analizar lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-268 de 2019, sobre la prevalencia de los derechos fundamentales frente a las normas procesales dentro de un proceso judicial.

El presente artículo de reflexión es desarrollado mediante la aplicación de una metodología hermenéutica de tipo doctrinal y jurisprudencial, que como lo indica Agudelo (2018) parte del análisis de diferentes fuentes bibliográficas, que permiten construir conceptos fundamentales de un tema concreto, para posteriormente realizar una síntesis aplicada al tema de investigación propuesto y lograr plantear las conclusiones a la pregunta de investigación.

1. Derecho fundamental a la administración de justicia en Colombia.

Los derechos fundamentales, el respeto a la dignidad humana y el goce efectivo de los derechos fundamentales son inequívocamente los pilares del estado democrático constitucional, en ese sentido como lo señala Caldera Ynfante (2018a, 2018b) lo anterior debe concebirse desde el concepto de democracia integral, vista como derecho fundamental, que no es únicamente la elección popular y la garantía de que exista participación ciudadana, sino que va más allá y tiene que ver concretamente con la garantía y ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la persona humana, inherentes a su dignidad, cuya obligación de respetar, proteger, garantizar y asegurar es una obligación del Estado llamado a su materialización en las distintas esferas y niveles del poder público, máxime en la rama judicial, con aplicación de lo que Caldera Ynfante (2020) advierte respecto de la necesidad de que los Estados garanticen “la vida buena, con suma de los elementos materiales y espirituales de la autorrealización humana” (p.1), y sin duda alguna el acceso a la administración de justicia le permite al individuo alcanzar lo anterior.

En ese sentido, es relevante señalar la importancia que tienen los derechos fundamentales en un ordenamiento jurídico como el colombiano, tal como lo ha advertido en diversas ocasiones la Corte Constitucional, quien ha manifestado al tenor literal, lo siguiente:

La perspectiva actualmente dominante en la Corte Constitucional sobre los derechos fundamentales se articula en torno a tres premisas: (i) la existencia de una pluralidad de criterios para determinar el carácter fundamental de un derecho (“fundamentalidad”), partiendo sin embargo de la relación con la dignidad humana como elemento central de identificación; (ii) la concepción de los derechos como un amplio conjunto de posiciones jurídicas, de las cuales se desprende también una pluralidad de obligaciones para el Estado y, en ocasiones, para los particulares; y (iii) la independencia entre la fundamentalidad y justiciabilidad de los derechos (Corte Constitucional, Sentencia T-428 de 2012).

Lo anterior, hace referencia a la construcción de la carta de derechos fundamentales que se encuentran de manera general en la Constitución, que tienen su esencia por la relación con la dignidad humana y que, a decir de Caldera Ynfante (2017), son un límite al poder porque la garantía de protección su núcleo esencial proscribire toda forma de arbitrariedad y su consagración superior prohíbe cualquier vulneración por formas autoritarias, abusivas, totalitarias o desbordadas

del ejercicio del poder político, siendo el juez constitucional el guardián de la Carta Política y la administración de justicia el órgano llamado a reconocerlos ya que en el Estado democrático constitucional, la defensa de los derechos fundamentales, pasa por garantizar que todas las personas puedan acudir al sistema judicial para accionar su garantía y que les sean protegidos conforme al orden jurídico, con prontitud, sin rituales excesivos que impidan la satisfacción material de sus derechos.

Concretamente, el derecho fundamental a la administración de justicia se encuentra consagrado en el Artículo 229 de la Constitución política colombiana de 1991, que señala expresamente “Artículo 229: Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”, lo que quiere decir que el Estado debe garantizar a todas las personas, el acceso a la administración de justicia de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley”. Toscano (2013) asegura que cuando se hace referencia al acceso a la administración de justicia que se debe contemplar en una sociedad democrática se hace necesario que los individuos puedan acceder a los órganos revestidos de función jurisdiccional, con el fin de resolver las controversias o solicitudes que tengan los mismos sobre un tema concreto, aplicando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, ese acceso a la administración de justicia debe darse en estrictas condiciones de igualdad, es decir que todas las personas estarán facultadas para acudir a las entidades o instituciones que ejercen algún tipo de función jurisdiccional en el caso de requerirlo, y los derechos de cada una de las partes deben ser garantizados por el juez que este dirimiendo el conflicto.

En esa medida, la eficacia del acceso a la administración de justicia en un Estado se medirá a partir de la resolución de conflictos a partir del buen servicio de las entidades que administran justicia, que en todo debe fundamentarse en las garantías procesales de las partes y la verificación de los derechos que se pretendan, lo anterior busca que el juez pueda a partir de lo anterior, generar un pronunciamiento razonado y motivado en un tiempo razonable que solucione el conflicto presentado (Araujo, 2011).

Respecto de este derecho en concreto, la Corte Constitucional ha hecho diversos pronunciamientos importantes, que resaltan el alcance de este:

El acceso a la justicia en términos constitucionales es un derecho fundamental en sí mismo y un derecho garantía. En efecto, la obligación de garantía respecto del derecho de acceso a la justicia se refiere al deber que tiene el Estado de hacer todo lo que esté a su alcance para el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Es decir, se trata de lograr el buen gobierno de la función y la provisión de infraestructura para que los jueces puedan ejercer su importante labor. Entonces, la realización de dicho derecho no se limita a la posibilidad que debe tener cualquier persona de plantear sus pretensiones ante las respectivas instancias judiciales, sino que se trata de una garantía que se extiende a dotar de infraestructura a las juezas y jueces para que puedan acceder al ejercicio de administrar justicia y de esta forma garantizar la eficiente prestación de este servicio público (Corte Constitucional, Sentencia T-421 de 2018)

Es claro, de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional que el acceso a la administración de justicia no puede verse como un derecho aislado, ya que a partir de la concreción de este se logran garantizar otros derechos fundamentales esenciales para la convivencia en sociedad, y el desarrollo de los postulados del Estado Social de Derecho.

Por ejemplo, Chaparro (2019) la importancia del papel de la justicia en el marco de los derechos de los individuos, en esa medida las instituciones que administran justicia deben responder de manera positiva a las solicitudes, con diligencia y experticia para resolver el tema que se está poniendo en su conocimiento. Lo anterior, impone una exigencia al Estado y sus operadores, quienes deberán abstenerse de discriminar por algún motivo a quien solicita su intervención y adicionalmente debe prevenir, investigar y proferir fallos que determinen los derechos en controversia.

Ahora bien, es importante advertir como lo señala la Corte Constitucional que el cumplimiento del fallo también constituye un elemento esencial del derecho al acceso a la administración de justicia, ya que el mismo se materializa con el cumplimiento de la decisión que adoptó el juez que conoció sobre la controversia, esto quiere decir que un fallo del cual no se garantiza su cumplimiento no puede identificarse como una efectiva administración de justicia.

El cumplimiento de las decisiones judiciales es un elemento constitutivo del derecho al acceso a la administración de justicia, el cual no se agota en la posibilidad que tienen los

ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, sino que su materialización implica que el mismo sea resuelto y que, si hay lugar a ello, se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico. Como corolario lógico de lo anterior esta Corporación ha aceptado la procedencia de la acción de tutela para reclamar el cumplimiento de las decisiones judiciales ejecutoriadas. No obstante, en relación con la procedencia de la acción de tutela para proteger derechos fundamentales vulnerados como consecuencia del incumplimiento de un fallo emitido por una autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales, la Corte ha tenido presente la obligación contenida en el mismo, diferenciando entre las obligaciones de dar y hacer (Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 2011).

Todo lo anterior, deja clara la importancia de que todos los individuos que conviven en un Estado puedan someter a consideración de las instituciones diseñadas para administrar justicia sus conflictos o controversias, de manera que se logre un pronunciamiento que permita definir el camino a seguir de acuerdo con los postulados de justicia, dados en el ordenamiento jurídico.

Ya que como lo indica Galán (2016) el reconocer y garantizar los derechos fundamentales de los individuos es un criterio esencial no solo en el ordenamiento jurídico interno colombiano, sino también en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, que ha advertido en diversas ocasiones la importancia de la participación y plural de los asociados en un Estado.

2. La importancia de la prevalencia de la justicia material.

Concatenado con lo anterior sobre el derecho fundamental a la administración de justicia, es esencial señalar que, dentro del Estado social de derecho consagrado por el Constituyente en la Carta Política de 1991, no basta con que se garantice el acceso a la jurisdicción, ya que la efectividad del derecho está ligada de manera concreta a la justicia material, por ello como lo indica Caldera Ynfante (2018) de acuerdo con las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales que integran el Bloque de Constitucionalidad, debe materializar el derecho al acceso a la administración de justicia a través de un fallo que proporcione justicia material, pronta y cumplida, para las partes.

Es importante en este sentido advertir, que la justicia material se refiere en estricto sentido a que el operador jurídico vaya más allá de la aplicación mecánica de los procedimientos, y que más allá de lo anterior, el juez realice una aplicación de justicia fundamentada en los principios y valores constitucionales y legales. Por lo tanto, como lo indica Higuera (2019) el exceso ritual manifiesto, trae como consecuencia que dentro de la resolución de los hechos objeto de controversia el juez privilegie la aplicación de la justicia formal sobre la justicia material, lo que quiere decir que se aplica de forma tan rigurosa la norma procedimental que se termina desconociendo la aplicación del derecho y la justicia en el contexto real del proceso.

Frente al concepto del exceso ritual manifiesto, la Corte Constitucional ha definido el mismo de la siguiente manera:

El apego estricto a las reglas procesales que obstaculizan la materialización de los derechos sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción de decisiones judiciales justas. En otras palabras, por la ciega obediencia al derecho procesal, el funcionario judicial abandona su rol como garante de la normatividad sustancial, para adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente incompatibles con el ordenamiento jurídico. Bajo este supuesto, la validez de la decisión adoptada judicialmente no solo se determina por el cumplimiento estricto de las reglas procesales, sino que además depende de la protección de los derechos sustanciales (Corte Constitucional, Sentencia SU-061 de 2018).

En esta providencia la Corte Constitucional señala que el juez en garantía de la aplicación de las normas procesales no debe perder de vista la justicia material que es aquella que garantiza la aplicación del derecho en estricto sentido, y cumple aquellos preceptos de justicia que reflejan la Constitución y la Ley. Debe ser claro entonces que lo procedimental no debe ser un obstáculo para que se valore el asunto a discusión de manera integral.

En el marco de lo anterior, es preciso tener en cuenta como lo advierte Ramírez (2007) que la justicia formal, si bien permite dirigir las actuaciones dentro de un proceso judicial, no puede convertirse en una camisa de fuerza para el operador jurídico que lo lleven a desconocer las realidades notorias dentro del proceso, por la aplicación de las formalidades previstas dentro del procedimiento.

La Corte Constitucional, al referirse a la Justicia formal ha indicado que no puede considerarse como válida la aplicación del derecho procesal, cuando el mismo resulte un obstáculo para el reconocimiento de un derecho sustancial, esto es concretamente la aplicación del principio de prevalencia de justicia material, como se aprecia a continuación:

La aplicación de este principio es de carácter obligatorio dentro de las actuaciones y decisiones de la Administración cuando define situaciones jurídicas, las cuales además de ajustarse al ordenamiento jurídico y de ser proporcionales a los hechos que le sirven de causa o motivo, deben responder a la idea de la justicia material. De igual forma, lo es en la función ejercida por los jueces en el análisis de los casos concretos, quienes dentro del estudio probatorio deben evitar incurrir en el exceso ritual manifiesto, en la inobservancia del material probatorio, y por el contrario han de sujetarse a los contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, como la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (Corte Constitucional, Sentencia T-339 de 2015).

Así entonces, cuando se hace referencia al principio de justicia material y prevalencia del derecho sustancial se señala la importancia de la aplicación de las formalidades y normas procesales, pero nunca en contravía de la aplicación del derecho sustancial, sino por el contrario como un vehículo para llegar a la materialización de los derechos de las partes, así entonces en ningún momento las formalidades pueden obstaculizar el reconocimiento de estos.

Así entonces, como lo indica Marshall (2010) las normas procesales no pueden ser una excusa para que el juez en el momento del fallo desconozca los derechos de las partes dentro del proceso y emita un fallo que no esté acorde con los hechos en discusión, por ello como lo advierten Rodríguez & León (2019) es fundamental que “el sistema jurídico ha de procurar por la necesaria limitación tanto de la positividad de la normatividad, en el caso concreto, como de la implicación, también necesaria, de excepciones al ordenamiento jurídico” (p.109).

Dicho lo anterior, se debe precisar que la inobservancia del principio de justicia material, es decir la incursión por parte del juez en el exceso ritual manifiesto configura un defecto procedimental, tema en el que se profundizara a continuación.

3.- El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y la afectación del derecho fundamental al debido proceso

El defecto procedimental supone la existencia de un error en la aplicación del procedimiento establecido, en ese sentido cuando el operador jurídico se aparta del procedimiento es posible que se configure esta causal que le permite a las partes interponer una acción de tutela contra providencias judiciales.

Se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido en la Sentencia T-781 de 2011, se estableció las causales con las que se constituye este defecto, que concretamente se configura cuando en primer lugar, se pasa por alto realizar el debate probatorio natural en todo proceso, en segundo lugar, se cuándo el juez omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, y por último señala la sentencia mencionada que se incurre en ese defecto cuando sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia.

Cuando se hace referencia al exceso ritual manifiesto, se habla en concreto de aquella actuación en la que el juez u operador jurídico realiza una aplicación mecánica de las formas, es decir se apega de manera extrema a las normas procedimentales, sin tomar en cuenta verdad jurídica objetiva que se presenta dentro del proceso judicial y que ha sido revelada a partir de los hechos y las pruebas (Bustos, 2014).

A continuación, se realiza un análisis acerca de las consideraciones que se han esbozado en la doctrina y la jurisprudencia sobre la prevalencia de la justicia material.

3.1 El defecto procedimental en el ordenamiento jurídico colombiano:

El defecto procedimental es una de las causales específicas que se ha previsto en la jurisprudencia para la interposición de una acción de tutela en contra de una providencia judicial, es importante señalar que este tipo de acción reviste ciertas características especiales, ya que no todas las decisiones judiciales pueden ser recurridas mediante este mecanismo, razón por la cual la Corte Constitucional ha desarrollado un conjunto de requisitos de procedibilidad que se deben cumplir de manera inequívoca so pena de que la interposición de esta sea rechazada de plano (Flórez, 2019).

Resulta indispensable traer a colación la definición del defecto procedimental dada por la Corte Constitucional, que señala lo siguiente:

El defecto procedimental se causa por un error en la aplicación de las normas que fijan el trámite a seguir para la resolución de una controversia judicial. Sin embargo, no se trata de cualquier defecto respecto de las formas propias de cada juicio, sino uno que tenga la entidad suficiente para negar la materialización de los derechos fundamentales. De ahí que, a lo largo del desarrollo jurisprudencial de esta Corporación, únicamente se hayan previsto dos modalidades para la procedencia de la acción de tutela, en los eventos que las partes aleguen la ocurrencia de una falla de tipo procedimental (Corte Constitucional, Sentencia SU-061 de 2018).

El defecto procedimental entonces, se puede presentar cuando el juez incurre en dos conductas concretas, la primera de ellas se presenta cuando el juez decide apartarse del procedimiento establecido en la norma. La segunda de las causales que ocupa el tema central de la presente investigación ocurre cuando se configura un exceso de ritual manifiesto, esto es cuando el juez o funcionario *“utiliza los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”* (Corte Constitucional, Sentencia T-367 de 2018).

Ahora bien, respecto de las modalidades del defecto procedimental, la Corte Constitucional ha manifestado lo siguiente:

(a) el defecto procedimental absoluto ocurre cuando “se aparta por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso”.^[30] (b) El defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, ocurre cuando la autoridad judicial “(...) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”; es decir, el funcionario judicial incurre en esta causal cuando “(i) no tiene presente que el derecho

procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) porque aplica rigurosamente el derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales (Corte Constitucional, Sentencia T-367 de 2018).

Así entonces, cuando el funcionario judicial antepone la norma procedimental al derecho sustancial, y en ese sentido su decisión desconoce los derechos de las partes dentro del proceso, incurre en un exceso ritual manifiesto que se considera como un defecto procedimental, que es una de las causales que habilitan a las partes del proceso a interponer una acción de tutela, contra la providencia judicial que resolvió la controversia.

García & Acevedo (2013) manifiestan que el juez constitucional al momento de evaluar una acción de tutela en contra de una providencia judicial, en la que se cuestiona por parte del accionante el exceso ritual manifiesto debe hacer una valoración probatoria del proceso en su generalidad y determinar si efectivamente se desconoció la verdad sustancial por la aplicación de una norma procesal.

Un ejemplo del exceso de ritual manifiesto que ha sido identificado a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se evidencia en la sentencia T-1306 de 2001, que estudia la acción de tutela presentada por el señor Florentino Enrique Méndez Espinosa, persona de la tercera edad, quien cuestiona el fallo judicial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que advirtió que la sentencia de la segunda instancia que desconoció el derecho a la pensión del accionante, no obstante decidió no proceder a casar la sentencia por considerar que existían una serie de errores técnicos en la presentación del recurso de casación.

En este caso concreto, la Corte Constitucional advirtió que la Corte Suprema de Justicia incurrió en este caso en un notorio exceso ritual manifiesto, ya que antepuso las normas netamente procedimentales al derecho sustancial, situación que a la luz de los principios del Estado social de Derecho está prohibido (Velásquez, 2016). Enfatiza la Corte Constitucional en esta providencia en que “(...) el procedimiento no es, en principio, ni debe llegar a ser impedimento para la efectividad del derecho sustancial, sino que debe tender a la realización de los derechos sustanciales al

suministrar una vía para la solución de controversias” (Corte Constitucional, Sentencia T-1306 de 2001).

En consecuencia, de lo anterior, la Corte Constitucional ampara el derecho fundamental al debido proceso y mínimo vital del accionante, y procede a dejar sin efecto la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral, y así mismo imparte la orden de que en máximo 30 días dicha corporación debería emitir una sentencia de reemplazo.

Otro ejemplo, se presenta en la decisión de la sentencia T-234 de 2017, en la que la señora Dignaras Esther Sarmiento Gamarra interpone acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cesar por la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de sus sobrino menores de edad, al desconocer dentro de un proceso de reparación directa la indemnización de perjuicios a los hijos menores de la persona fallecida (sobrinos de la accionante) aduciendo que nunca se acreditó dentro del proceso que la señora Sarmiento Gamarra fuese la representante legal de sus sobrinos.

En primera instancia conoció de la acción de tutela el Consejo de Estado, quien declaró improcedente la acción de tutela interpuesta contra la providencia judicial del Tribunal del Cesar. En el análisis realizado por la Corte Constitucional advierte que el exceso ritual manifiesto no se configura con la ocurrencia de cualquier tipo de irregularidad procedimental dentro de un proceso judicial. El mismo se materializa por una omisión que se produce en la aplicación del procedimiento determinado en el caso concreto que resulta particularmente grave, en el sentido de que lleva al juez a utilizar irreflexivamente normas procesales apartándose del derecho sustancial (Corte Constitucional, Sentencia T-234 de 2017).

Así entonces, la Corte Constitucional hace referencia a las normas procedimentales que en materia de representación legal de menores de edad rigen en Colombia, y hace énfasis en lo preceptuado en el Artículo 11 de la Ley 1098 de 2006 dispone en su artículo 11 que señala que “cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes”. En este sentido, considera la Corte Constitucional que en este caso el juez incurrió en un exceso ritual manifiesto al dar más valor a los aspectos formales y procedimentales que a los derechos sustanciales a la

reparación integral de los menores de edad, y los cuales se desconocieron abiertamente al excluirlos de la indemnización ordenada.

Es claro entonces que la aplicación de normas procedimentales en detrimento de los derechos sustanciales configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que permitirá que la providencia sea cuestionada en sede de tutela. Lo anterior, revela la importancia de que el juez ante quien se somete la controversia realmente sea un administrador de justicia, que no concibe el derecho únicamente desde el procedimiento, contrario sensu, busca la materialización del derecho sustancial a partir de los elementos probatorios que han sido puestos a su disposición (Yáñez & Castellanos, 2016).

Es importante señalar que en Colombia la Corte Constitucional, ha logrado a través de su jurisprudencia que el derecho fundamental del acceso a la administración de justicia no se predique únicamente en el efectivo sometimiento de la controversia ante una institución que tenga funciones jurisdiccionales, sino que ha logrado en casos como los anteriormente expuesto que se realice realmente una adecuada administración de justicia que responda a los criterios de justicia material y materialice los derechos de los individuos. Como bien lo señalado a través de su jurisprudencia la Corte Constitucional:

El artículo 228 de la Constitución consagra la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales. El derecho sustancial es aquel que se refiere a los derechos subjetivos de las personas, en oposición al derecho formal que establece los medios para buscar la efectividad del primero. En un Estado de derecho, se considera que la justicia se logra precisamente mediante la aplicación de la ley sustancial (Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009).

En esa medida, como lo indica Hernández (2015) la acción de tutela contra providencias judiciales resulta un medio eficaz para que se revisen los yerros que son cometidos por los jueces en el desarrollo de los procesos judiciales y se adviertan irregularidades tan importantes como la aplicación de manera prevalente de las normas procedimentales, vulnerando el derecho al debido proceso y la efectiva administración de justicia

4.- Análisis de la Sentencia SU-268 de 2019 de la Corte Constitucional colombiana.

Esta sentencia reviste especial importancia teniendo en cuenta que es la última sentencia de unificación respecto del tema de exceso ritual manifiesto. En esta providencia se estudia la acción de tutela instaurada por el señor Alfonso Contreras Lázaro, en contra de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el accionante solicita la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad. Ahora bien, se procederá a analizar en primer lugar los hechos por los cuales se interpone la acción de tutela, y posteriormente los argumentos dados por la Corte Constitucional respecto del exceso de ritual manifiesto.

4.1 Hechos objeto de la discusión en la Sentencia SU-268 de 2019:

En esta jurisprudencia se discute la resolución de un conflicto en materia civil por la compraventa de un inmueble en la cual se encontraba involucrada una fiducia mercantil, donde se discute si la persona que suscribió la misma, estaba facultado para constituir el mencionado contrato de fiducia ni para realizar la cesión posterior que realizó, ya que únicamente el propietario le había otorgado poder exclusivamente para llevar a cabo el contrato de compraventa del bien objeto de la promesa(Corte Constitucional Sentencia SU-268 de 2019).

El accionante, inició un proceso ordinario a fin de que se declarara la “*inexistencia -por falta de poder de Munarth- y en subsidio, la terminación del contrato de fiducia mercantil, con fundamento en el artículo 1238 del Código de Comercio*”. En primera instancia, el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, considerando que el actor no tenía legitimación en la causa por no haber sido parte en el contrato de fiducia, y por no aparecer probado el fraude que, para ejercer ‘la acción pauliana, decisión que posteriormente fue confirmada por la Sala Civil de descongestión del Tribunal Superior de Bogotá.

En ese contexto, el señor Alfonso Contreras Lázaro interpuso un recurso extraordinario de casación, que fue resuelto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la que esta decidió no casar la sentencia, dejando de lado que en había encontrado una serie de “gravísimos errores jurídicos y de apreciación probatoria cometidos por el Tribunal”. No obstante, señalo que el demandante no probó su calidad de acreedor, ni las connotaciones de acreedor cierto e indiscutido bajo el argumento los documentos que fueron aportados con la demanda:

(...) son copias simples de documentos emanados de terceros, que si bien hacen fe cuando la parte a quien se oponen no pide su ratificación, no pueden en este caso tenerse como pruebas, ya que el demandado Mejía Zapata no pudo controvertir lo aseverado en ellos, por haber estado representado por curador ad litem (Corte Constitucional, Sentencia SU-268 de 2019).

Teniendo en cuenta los hechos referidos, la Corte Constitucional entra a realizar un análisis sobre si en este caso se configuro el exceso ritual manifiesto por parte de las autoridades que conocieron el caso.

4.2 Las consideraciones de la Corte Constitucional sobre el exceso ritual manifiesto y las reglas para su identificación:

En este caso concreto, la Corte Constitucional reitera que la libertad que se ha entregado a los jueces para que realicen la valoración del material probatorio dentro de un proceso judicial aplicando la sana crítica, dicha potestad no quiere decir que estos puedan desconocer la justicia material y el derecho sustancial, por apegarse a un exceso ritual probatorio y procedimental.

Lo anterior, teniendo en cuenta que ese exceso ritual manifiesto en materia procedimental puede hacer que el juez incurra en una indebida valoración de las pruebas e incluso que deseche algunas pruebas que resulten esenciales para el proceso. De igual manera, señala que no debe perderse de vista que el derecho procesal es un medio que busca la materialización efectiva de los derechos de los ciudadanos.

Es importante señalar que en esta providencia se señala que existe el defecto procedimental en su dimensión negativa, en los casos en los que el juez no otorga mérito probatorio a las copias simples aportadas a procesos judiciales, en los casos en que la contraparte no tachado de falsas las mismas, también cuando dicho juez no hace uso de la potestad para decretar y practicar pruebas de manera oficiosa que le permitan dilucidar los hechos y fallar.

Señala en este contexto la Corte Constitucional que teniendo en cuenta que las copias del contrato de promesa de compraventa y los oficios que obran dentro del expediente, constituían plena prueba del interés del accionante a pesar de ser copias simples, la negativa de valorarlos

por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia genero sin duda alguna un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

En este sentido, la Corte Constitucional resolvió *revocar* la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que negó el amparo invocado por Alfonso Contreras Lázaro y en lugar de esta *proteger* los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte actora (Corte Constitucional, Sentencia SU-268 de 2019).

CONCLUSIONES

Si bien es cierto que el legislador es el competente para determinar los tipos de juicio y los elementos de cada uno de estos y en este sentido los procedimientos que deben seguir cada uno, en desarrollo de esta función, determina normas de tipo procedimental, es el juez quien debe en su función de administrar justicia -con apego al debido proceso- privilegiar aspecto de fondo y no de forma, de manera que privilegie la justicia material y no la formal, lo anterior quiere decir que deben prevalecer los valores y principios señalados en la Constitución Política, para, en palabras de Caldera Ynfante *et. al.* (2019), destacar la prevalencia de la dignidad humana de todas las personas llamadas a realizar su proyecto de vida y la vida sea protegida bajo el amparo de la legalidad, en un Estado constitucional donde todos sus órganos, empezando por la rama judicial, garanticen los derechos fundamentales de todos, donde se pueda vivir sin arbitrariedades, ni sumisión ni sometimiento a controles abusivos frente al poder político.

En esa medida, debe ser claro que el derecho fundamental a la administración de justicia no es efectivo únicamente con la garantía del acceso a los entes judiciales, ya que si dicho acceso termina por imponer barreras como formalidades o procedimientos que llegan a impedir que se alcance la justicia material. En consecuencia, se debe precisar que el apego extremo a las formalidades desconociendo la realidad del proceso, es una vulneración notoria al derecho fundamental a la administración de justicia y, colateralmente, al debido proceso.

Si bien es claro entonces que existen unos procedimientos, mediante los cuales se deben tramitar los procesos dependiendo cada uno, dichas formalidades o rituales excesivos no pueden resultar una excusa para desconocer la efectividad del derecho sustancial, es decir, de la justicia material, imponiendo verdaderas trabas para que se llegue a la verdad procesal, en ese sentido el desconocimiento de los derechos sustanciales por darle prevalencia a las formalidades rituales excesivas deviene en un defecto de la administración de justicia, remediable a través de la acción de tutela, por ser una vía de hecho judicial que constituye una clara vulneración a los derechos de las partes procesales y en ese sentido el defecto judicial alegado debe ser valorado por el juez constitucional cuando se interponga la respectiva acción de tutela a la que hay lugar.

No obstante, y si bien existe la posibilidad de acudir al mecanismo de la acción de tutela cuando existe un ritual de exceso manifiesto que afecta de manera clara la administración de justicia por desconocer la realidad de la situación fáctica que se está debatiendo, debe ser claro que en estos casos se le está imponiendo una carga adicional al ciudadano, quien debe acudir a un juez que reconozca la vulneración de sus derechos constitucionales, y evidencie el defecto cometido en un proceso judicial anterior sometido a las mismas normas constitucionales que en todo momento privilegian la justicia material.

Referencias

- Agudelo, Ó. A. (2018). Los calificativos del derecho en las formas de investigación jurídica. En Ó. A. Agudelo-Giraldo, J. E. León Molina, M. A. Prieto Salas, A. Alarcón-Peña & J. C. Jiménez-Triana. La pregunta por el método: derecho y metodología de la investigación (pp. 17-44). Bogotá: Universidad Católica de Colombia.
- Araujo, R. (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado. Revista Estudios Socio-Jurídicos, Núm. 13 vol. [1]. ISSN: 0124-0579. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=733/73318918009>
- Bustos, Y. A. (2014). Exceso de ritual manifiesto en la jurisprudencia constitucional colombiana. Estudios de Derecho, Núm. 71 Vol. (157), 327-350. Recuperado de <http://aprendeonlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red/article/view/21668>

- Botero, C. (2002). Acción de tutela contra providencias judiciales en el ordenamiento jurídico colombiano. Precedente. Revista Jurídica, 5-46. Recuperado de <https://webcache.icesi.edu.co/revistas/index.php/precedente/article/view/1982>
- Caicedo, A. E. (2017). El exceso ritual manifiesto y la visión constitucional de la actividad judicial. Justicia, Núm. 32, pp. 79-117 Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-74412017000200079&script=sci_abstract&tlng=en
- Caldera Ynfante, J. E. (2012). El Bloque de Constitucionalidad como herramienta de protección de los derechos fundamentales. Una aproximación al estudio de sus aportes desde el derecho procesal constitucional. Derecho procesal constitucional (Eduardo Andrés Velandia Canosa -Director Científico), Tomo III. Volumen I. Bogotá: VC Editores Ltda. y ACDPC. 2012. Pág. 223-255
- Caldera Ynfante, J. E. (2017). Totalitarismo del Siglo XXI en Venezuela. La relación de identidad entre chavismo, nazismo y fascismo a partir de la ampliación de la distinción amigo-enemigo y el concepto de dictadura soberana o plebiscitaria de Carl Schmitt. Revista Democracia Actual, Registraduría del Estado Civil, Bogotá. Pág. 151-205. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/337448283_Totalitarismo_del_siglo_XXI_en_Venezuela_-_Revista_Democracia_Actual_-_Jesus_Caldera_Ynfante_PhD_Pag_150_-_205
- Caldera Ynfante, J. E. (2018a). Democracia Integral: un derecho fundamental para el logro de la dignidad humana, el proyecto de vida valioso y la felicidad social. Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá. Visible en: https://www.researchgate.net/publication/337447998_Democracia_Integral_-_un_Derecho_Fundamental_para_el_Logro_de_la_dignidad_Humana_el_Proyecto_de_Vida_Valioso_y_la_Felicidad_Social_-_Jesus_Caldera_Ynfante_PhD
- Caldera Ynfante, J. E. (2018b). La democracia como derecho fundamental: Ideas sobre un modelo de democracia integral. Revista Opción. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, Vol. 34, Núm 85, Pág. 584 – 624. Visible en: https://www.researchgate.net/publication/337448543_La_democracia_como_derecho_fundamental_Ideas_sobre_un_modelo_de_democracia_integral

- Caldera Ynfante, J. de los Santos, I, & Ávila Hernández, F. (2018c). La forja del Estado democrático constitucional en Venezuela y su relación con la democracia integral. *Revista Utopía y Praxis Latinoamericana*, Vol. 23, Núm 2 Extra, pág. 75-97. ISSN: 1315-5216. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=279/27957770016>
- Caldera Ynfante, J. E. *et. al.* (2019). Biopoder, biopolítica, Justicia Restaurativa y Criminología Crítica. Una perspectiva alternativa de análisis del sistema penitenciario colombiano. *Revista Utopía y Praxis Latinoamericana*, revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, ISSN-e 1316-5216, No. 2 Extra. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7113211>
- Caldera Ynfante, J. E. (2020). La primera guerra "biológica" mundial y el derecho humano a un nuevo orden global. Disponible en: [https://www.researchgate.net/publication/340634664 LA PRIMERA GUERRA BIOLOGICA MUNDIAL Y EL DERECHO HUMANO A UN NUEVO ORDEN GLOBAL](https://www.researchgate.net/publication/340634664_LA_PRIMERA_GUERRA_BIOLOGICA_MUNDIAL_Y_EL_DERECHO_HUMANO_A_UN_NUEVO_ORDEN_GLOBA)
- Chaparro, A. (2019). Acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia sexual con discapacidad reflexión en el contexto colombiano. *Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política*, 13(1), 123-161. ¿Ciudad? Recuperado de https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/2104/2418
- Flórez, W. R. (2019). La tutela contra providencia judicial en los casos de defecto sustantivo: análisis de procedibilidad/ Protection against judicial orders in cases of substantive defect: Analysis of procedure. *Revista Nuevo Derecho*, 15(25), 5-22. Recuperado de <https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA614029005&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=20114540&p=IFME&sw=w>
- Galán, A. (2016). Entre justicia y moralidad: criterios metateóricos en cuanto a la justicia, la moral y el derecho*. *Novum Jus: Revista Especializada En Sociología Jurídica Y Política*, ¿Editorial? ¿Ciudad? 10(2), 103-118. Recuperado de https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/1321

- García, P., & Acevedo, M. (2013). La doctrina de la corte constitucional colombiana sobre el exceso ritual manifiesto en materia de pruebas (2001-2011). *Vniversitas*, (127). ISSN: 0041-9060. ¿Editorial? ¿Ciudad? Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=825/82531023005>
- Higuera, D. M. (2019). Acción de Tutela contra providencias judiciales: elementos, condiciones y crítica. *Academia & Derecho*, 10(18), 275-333. Recuperado de <http://190.143.117.169/ojs/index.php/derecho/article/view/352>
- Marshall Barberán, P. (2010). El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política. *Revista de derecho (Coquimbo)*, Núm. 17 Vol. (2), pp. 185-204. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-97532010000200008&script=sci_arttext.
- Ramírez, D. M. (2007). A propósito de la justicia material (Reflexiones sobre la justicia en el proceso vs. la justicia material). *Revista Opinión Jurídica*, Num. 6. Vol. (12), pp. 165-185. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v6n12/v6n12a09.pdf>
- Rodríguez Ortigón D., & León Molina J. E. (2015). LA LÓGICA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: ANÁLISIS EN MARCO DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL. *Novum Jus*, 9(2), 95-110. <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2015.9.2.4>
- Toscano, F. H. (2013). Aproximación conceptual al "acceso efectivo a la administración de justicia" a partir de la teoría de la acción procesal. *Revista de Derecho Privado*, (24), 237-257. Edición Online: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/3486/3472>
- Velásquez, J. G. (2016). El derecho procesal fundamental. *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, (97), 313-350. Edición Online: <https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/6617>

Referencias Jurisprudenciales

- Colombia, Corte Constitucional (2019). Sentencia SU – 268. M. P. José Fernando Reyes Cuartas. Bogotá.

Colombia, Corte Constitucional (2018) Sentencia T-428, Expediente. MP. Carlos Bernal Pulido. Bogotá.

Colombia, Corte Constitucional (2018) Sentencia T-421, Expediente T-6.723.455. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. Bogotá.

Colombia, Corte Constitucional (2011) Sentencia T-799, Expediente T-3057830. MP. Humberto Antonio Sierra Porto. Bogotá.

Colombia, Corte Constitucional (2018). Sentencia SU – 061. M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Bogotá.

Colombia, Corte Constitucional (2015) Sentencia T-339, Expediente T-479148. MP. Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá.

Colombia, Corte Constitucional (2013) Sentencia T-620, Expediente T-3540786. MP. Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá.

Colombia, Corte Constitucional (2018) Sentencia T-367, Expediente T-6.487.524. MP. Cristina Pardo Schlesinger, Bogotá.

Colombia, Corte Constitucional (2001) Sentencia T-1306, Expediente T-495885. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, Bogotá.

Colombia, Corte Constitucional (2017) Sentencia T-234, Expediente T-5982866. MP. María Victoria Calle Correa, Bogotá.

Colombia, Corte Constitucional (2009) Sentencia T-264, Expediente T-2.112.744. MP. Luis Ernesto Vargas Silva, Bogotá.